



RESOLUCIÓN No. CSJBOR23-359
Cartagena de Indias D. T. y C., 13 de abril de 2023

“Por medio de la cual se acepta un desistimiento y se archiva una solicitud de vigilancia judicial administrativa”

Vigilancia judicial administrativa No: 13001-11-01-002-2023-000190-00

Solicitante: Luis Amaury Hurtado Babilonia

Despacho: Juzgado 7° Penal Municipal de Cartagena

Funcionaria judicial: Alexander Gil Aguirre y Omar Arnedo Jiménez

Tipo de proceso: Acción de tutela

Número de radicación del proceso: 13001400400720230003600

Magistrado ponente: Patricia Rocío Ceballos Rodríguez

Fecha de sesión: 12 de abril de 2023

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de vigilancia judicial administrativa

Por mensaje de datos recibido el 21 de marzo del 2023, el señor Luis Amaury Hurtado Babilonia, actuando como accionante, dentro de la acción de tutela, identificada con el radicado 13001400400720230003600, que cursa en el Juzgado 7° Penal de Cartagena, solicitó vigilancia judicial administrativa, dado que, según lo afirma, desde el 14 de febrero de 2023, presentó acción de tutela, sin que a la fecha se haya emitido decisión de fondo sobre el asunto.

2. Trámite de la vigilancia judicial administrativa

Por considerar que la solicitud de vigilancia judicial cumplía con los requisitos consignados en el artículo 3° del Acuerdo No. PSAA11-8716 de 2011, mediante Auto CSJBOAVJ23-179 del 23 de marzo de 2023, se dispuso requerir a los doctores Alexander Gil Aguirre y Omar Arnedo Jiménez, juez y secretario, respectivamente, del Juzgado 7° Penal Municipal de Cartagena, para que suministraran información detallada del proceso de marras, acto administrativo que fue notificado mediante mensaje de datos el 27 de marzo del año en curso.

3. Desistimiento de la solicitud de vigilancia judicial administrativa

Por mensaje de datos recibido del 27 de marzo de 2023, el señor Luis Amaury Hurtado Babilonia, solicitó: *“EL RETIRO DE LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA”*, como quiera que por vía telefónica el secretario del Juzgado 7° Penal Municipal de Cartagena, le informó que la razón por la cual no había sido notificado de las actuaciones era porque su correo electrónico no contaba con espacio para recibir mensajes de datos.

Por lo anterior, se tiene que el quejoso solicitó a esta Corporación, el desistimiento expreso del trámite administrativo inicialmente pretendido.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar es competente para conocer sobre la solicitud de vigilancia judicial administrativa promovida por el señor Luis Amaury Hurtado

Babilonia, conforme a lo prevenido en el artículo 1° del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, reglamentario del numeral 6° del artículo 101 de la Ley 270 de 1996, habida cuenta que la petición se dirige en contra de uno de los despachos judiciales de esta circunscripción territorial.

2. Planteamiento del problema administrativo

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015, esta Corporación debe resolver si existe razón para aceptar el desistimiento del trámite de la vigilancia judicial administrativa o si, por el contrario, lo procedente es continuar de oficio la actuación administrativa y, en ese sentido, determinar si existe mérito para dar apertura al mencionado mecanismo o resolver de fondo la solicitud con fundamento en el artículo 6° del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, para lo cual abordarán primero los temas relacionados a continuación.

3. Alcances de la vigilancia judicial administrativa

El Acuerdo PSAA11-8716 de octubre 6 de 2011, adopta el reglamento respecto del mecanismo de la vigilancia judicial administrativa consagrada en el artículo 101 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, y establece en su artículo 1° que se concibe *“para que la justicia se administre oportuna y eficazmente”* y que *“es diferente de la acción disciplinaria a cargo de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias”*, lo que conduce a inferir que el estudio se ciñe a determinar: *i)* cuestiones de incumplimiento de términos actuales porque las anomalías pasadas deben ser objeto de los procesos disciplinarios; *ii)* si un funcionario incurrió en acciones u omisiones contrarias a la oportuna y eficaz administración de justicia; y *iii)* si existe una actuación en forma negligente o si por el contrario su tardanza se encuentra inmersa dentro de alguna de las causales de justificación o responsabilidad.

De otra parte, el artículo 14 del Acuerdo en comento prescribe: *“Independencia y autonomía judicial. En desarrollo de las actuaciones de vigilancia judicial administrativa, los Magistrados de la Sala Administrativa competente deberán respetar la autonomía e independencia de los funcionarios, de tal suerte que en ningún caso podrán sugerir el sentido en que deben proferir sus decisiones”*. Dicha norma se encuentra en consonancia con lo contemplado en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política y el artículo 4° de la Ley 270 de 1996, lo cual significa que la institución de la vigilancia judicial administrativa, como mecanismo administrativo que es, no está diseñado para controvertir decisiones judiciales, ni la forma como un funcionario interpreta una norma o valora las pruebas. Así mismo, es pertinente resaltar que este trámite no es otra instancia judicial y no puede emplearse para revivir términos.

En conclusión, esta atribución del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, es de naturaleza eminentemente administrativa y separada de la función jurisdiccional disciplinaria contra jueces y abogados, que le corresponde a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial.

4. Desistimiento expreso de las actuaciones administrativas

El artículo 18 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015, dispone que *“Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos”*

legales, pero las autoridades podrán continuar de oficio la actuación si la consideran necesaria por razones de interés público; en tal caso expedirán resolución motivada”.

Adicionalmente, en la sentencia C-951 de 2014, la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad de este artículo, señaló:

“la facultad de desistimiento expreso de las peticiones prevista en la norma constituye una dimensión del derecho de petición del cual puede disponer su titular”.

Así pues, los particulares que adelanten actuaciones administrativas, como las solicitudes que se presentan en ejercicio del mecanismo de vigilancia judicial administrativa, pueden desistir expresamente de estas y la autoridad administrativa respectiva podrá determinar si las continúa o no de oficio, siempre que exista acto administrativo motivado que dé cuenta de ello.

5. Caso concreto

Por mensaje de datos recibido el 21 de marzo del 2023, el señor Luis Amaury Hurtado Babilonia, actuando como accionante, dentro de la acción de tutela de la referencia, que cursa en el Juzgado 7° Penal de Cartagena, solicitó vigilancia judicial administrativa, dado que, según lo afirma, desde el 14 de febrero de 2023, se encuentra pendiente la admisión de la acción en cuestión.

Mediante mensaje de datos recibido el 27 de marzo del año en curso, el quejoso formuló desistimiento expreso respecto del presente trámite administrativo, y solicitó *“EL RETIRO DE LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA”*, dado que le fue informado por el despacho judicial encartado, que la falta de notificación de las actuaciones se debía a una irregularidad en su correo electrónico.

En este punto, precisa la Corporación, que el peticionario se encuentra legitimado para desistir expresamente de la solicitud de vigilancia judicial administrativa presentada dentro del proceso de marras, teniendo en cuenta que conforme al artículo 18 de la Ley 1437 de 2011, basta con la manifestación expresa en tal sentido por parte de aquel para que sea aceptada.

Igualmente, reza el artículo en mención, que la autoridad administrativa podrá continuar de oficio la actuación siempre que lo considere necesario por razones de interés público, mediando, en todo caso, acto administrativo motivado que así lo considere.

Descendiendo al caso concreto, se observa que el objeto de la solicitud recae sobre la presunta mora en la que se encontraba incurso el Juzgado 7° Penal Municipal de Cartagena, en admitir la acción de tutela de la referencia, la cual, a su juicio, a la fecha de presentación de la solicitud de vigilancia, no había sido realizada.

Así las cosas, se tiene que el peticionario solicitó el archivo y cierre de solicitud de vigilancia judicial. Siendo ello así, se evidencia que el quejoso perdió el interés de seguir con las resultas de esta actuación administrativa.

No obstante, como quiera que la acción sobre la cual se pretendía ejercer vigilancia judicial corresponde a una de naturaleza constitucional, esta Corporación con el fin de constatar la ocurrencia de actuaciones tardías, se permitió verificar que mediante providencia del 28 de febrero de 2023, notificada ese mismo día al correo electrónico del

solicitante, se resolvió declarar la carencia de objeto por hecho superado. De lo anterior, se advierte que el Juzgado 7° Penal Municipal de Cartagena, profirió fallo de tutela dentro del término previsto en el artículo 29 del Decreto Ley 2591 de 1991.

6. Conclusión

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Seccional aceptará el desistimiento de la solicitud de vigilancia judicial administrativa presentada por el señor Luis Amaury Hurtado Babilonia y, en consecuencia, se dispondrá el archivo de este trámite.

De conformidad con lo expuesto, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar,

III. RESUELVE

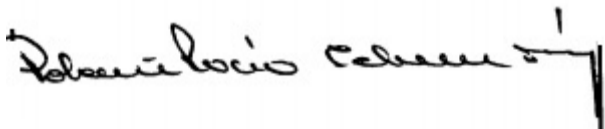
PRIMERO: Aceptar el desistimiento expreso de la solicitud de vigilancia judicial administrativa promovida por el señor Luis Amaury Hurtado Babilonia, sobre la acción de tutela, identificada con el radicado No. 13001333301520200011900, que cursa en el Juzgado 7° Penal Municipal de Cartagena, por las razones anotadas.

SEGUNDO: Archivar la solicitud de vigilancia judicial administrativa promovida por el señor Luis Amaury Hurtado Babilonia, sobre la acción de tutela, identificada con el radicado No. 13001333301520200011900, que cursa en el Juzgado 7° Penal Municipal de Cartagena, por las razones anotadas.

TERCERO: Comunicar la presente resolución al solicitante, y a doctores Alexander Gil Aguirre y Omar Arnedo Jiménez, juez y secretario, respectivamente, del Juzgado 7° Penal Municipal de Cartagena.

CUARTO: Contra esta decisión solo procede el recurso de reposición, que deberá ser interpuesto dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación, ante esta misma Corporación, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, artículo 17 y siguientes.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



PATRICIA ROCÍO CEBALLOS RODRÍGUEZ
Presidenta

M.P. PRCR / MIAA